

Los Estados Unidos ante el Brasil y la Argentina: los golpes militares de la década del 60

MARIO RAPOPORT y RUBÉN LAUFER

Universidad de Buenos Aires

Las relaciones del Brasil y la Argentina con los Estados Unidos suscitan especial interés, tanto por la gravitación de ambos países en el escenario económico y político latinoamericano, como por el decisivo papel que en el mismo han desempeñado históricamente los vínculos con las grandes potencias.

El estudio de acontecimientos políticos significativos ocurridos en ambos países, en parecidas épocas y circunstancias, puede arrojar luz sobre similitudes y diferencias en los contextos, sobre la madeja de intereses internos que actuaron en períodos cruciales y sobre la incidencia que en esos episodios tuvieron las prioridades de la política exterior norteamericana. Una de esas coyunturas es la que dio lugar al golpe de estado que derrocó a João Goulart en Brasil (1964), y al que acabó con la presidencia de Arturo Illia en la Argentina (1966).

A comienzos de la década de los 60, el mundo asistía a una verdadera escalada del conflicto bipolar. La Guerra Fría entre ambas superpotencias y sus respectivos bloques constituye el marco de referencia obligado para el estudio y la comprensión de las relaciones económicas y políticas internacionales de la época.

Con la generalización del conflicto Este-Oeste, ningún rincón del mundo quedó fuera de la competencia que por la primacía mundial libraban Washington y Moscú. Se reactivó la vieja política de bloques rivales, particularmente a través de la intervención militar norteamericana en el sudeste asiático y del proceso de profundos cambios operados a partir de la muerte de Stalin en la URSS; proceso que, desembocando en el golpe de estado que en 1964 reemplazó al premier Nikita Jruschov por la "troika"

Brezhnev-Kosygin-Podgorny, se materializaría en un acelerado vuelco expansionista del gigante soviético. Bajo la cobertura retórica de la "disuasión", por un lado, y de la "competencia pacífica", por el otro, ambas superpotencias dieron un impulso dramático a su carrera armamentista y nuclear. Durante las siguientes dos décadas el mundo sería puesto varias veces al borde de una nueva guerra mundial, como lo evidenció la "crisis de los misiles" de 1962. Las relaciones comerciales y diplomáticas internacionales adquirieron entonces una marcada connotación estratégica.

Otras tendencias secundaban este rasgo decisivo del mundo bipolar. Por un lado se verificaba el creciente protagonismo de los países del Tercer Mundo a través del vasto movimiento anticolonialista y antiimperialista y de la conformación del Movimiento de los No Alineados. Por el otro, ambos bloques estaban experimentando serias fisuras. China se apartó del bloque soviético. Europa y Japón, completada la reconstrucción de sus economías de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, se transformaban aceleradamente en nuevos centros mundiales del poder económico y financiero, dependientes aún del paraguas militar de los Estados Unidos y al mismo tiempo aspirantes a un margen cada vez mayor de autonomía política. Los países de Europa occidental consolidaban su fuerza económica a través de la integración comunitaria.

América Latina constituía un campo particular de la rivalidad bipolar. La persistencia de estructuras económicas atrasadas y la asimetría de sus relaciones económicas con las grandes potencias explica la emergencia en varios países de la región, ya durante la década anterior, de una vasta movilización social y de propuestas políticas de mayor o menor sesgo nacionalista y populista, que cuestionaban el atraso y la dependencia y ofrecían caminos alternativos en procura del desarrollo económico y social.

El triunfo de la Revolución Cubana de 1959 causó honda conmoción en todo el ámbito latinoamericano. La preocupación principal de Washington en la región pasó a contrarrestar la creciente efervescencia social —encuadrada en una heterogénea gama de corrientes reformistas o revolucionarias— y las tendencias de algunos de sus gobernantes hacia el nacionalismo económico, fenómenos que los círculos dirigentes norteamericanos atribuían linealmente a la penetración soviética e identificaban con la "infiltración comunista". El tema de las "amenazas extracontinentales" dominó, en agosto de 1960, la Conferencia de la OEA en Costa Rica.

Frente a la convulsionada realidad latinoamericana de aquellos años, que la diplomacia y los servicios de inteligencia estadounidenses percibían preñada de amenazas para los intereses más generales de la superpotencia, la política regional del presidente John F. Kennedy encaró una estrategia de alcance continental, incluyendo el reformismo preventivo y asistencialista de la

Alianza para el Progreso (APEP), las habituales presiones diplomáticas y financieras, la acción coordinada desde el Pentágono de los ejércitos "americanos" en la lucha contrainsurgente y la vía del intervencionismo armado practicada en respaldo al intento restaurador de los exiliados cubanos en Playa Girón; métodos, todos, complementarios de la política continental de "contención del comunismo". Tras la desaparición de Kennedy, durante el período presidencial de Lyndon Johnson, Washington endureció su política exterior, que se desplazó crecientemente —en el marco doctrinario de las "fronteras ideológicas"— hacia el enfoque estratégico-militar, a través de pactos bilaterales de asistencia, "operaciones" de golpismo encubierto (Brasil, Argentina) y la intervención militar unilateral como en Santo Domingo, a la que se trató luego de legitimar con el paraguas "colectivo" de una "fuerza interamericana" de la OEA. La decisión de invadir la República Dominicana en abril-mayo de 1965 marcó el vuelco decidido hacia la "solución militar", dando así el definitivo golpe de gracia a los objetivos proclamados que habían inspirado la creación de la Alianza para el Progreso.

El fracaso de la APEP conllevó también el ocaso de los enfoques "sociales" (desarrollistas) entonces predominantes en las dirigencias políticas latinoamericanas, y el reforzamiento en los Estados Unidos de las tendencias proclives a la solución represiva o militar. Sobre el trasfondo de la aguda confrontación bipolar —manifiesta en la intensificación de la escalada militar norteamericana en Vietnam—, los países latinoamericanos quedaron involucrados de lleno en la Guerra Fría.

La dimensión continental de las políticas norteamericanas hacia los países del Cono Sur se tradujo en la generalizada adopción por sus Fuerzas Armadas de la doctrina militar propugnada desde el *National War College*, centrada en el combate al "enemigo interno". Los Ejércitos latinoamericanos debían reforzar su función de garantes del orden económico y social. La "defensa del mundo occidental" —bajo coordinación de EE.UU.— sustituyó el principio de la defensa nacional, cuyos intereses eran identificados con los de la potencia líder del "mundo libre".

La nueva estrategia norteamericana procuraba impedir que cualquier potencia foránea (esto es, la URSS) pudiera hacer pie militarmente en el "hemisferio", y combatir tanto el estado de creciente insurrección social de las masas populares como las tendencias nacionalistas y anti-norteamericanas —e incluso todo "neutralismo"— latentes en sectores gravitantes de las clases dirigentes y de las Fuerzas Armadas, que pudieran abrir una brecha favorable a lo que la política exterior norteamericana entendía como "explotación comunista" de la crisis económica y el descontento social.¹

Más allá de sus particularidades nacionales —históricas y políticas—,

puede hallarse un sustrato común en la notoria incidencia que la diplomacia y la inteligencia norteamericanas tuvieron en los procesos que desembocaron en los golpes de Estado de 1964 y 1966 en Brasil y Argentina. Existe en ello un hilo conductor que viene de mucho antes, y que evoca el notable paralelismo de la actitud de Estados Unidos frente a las respectivas coyunturas políticas en 1945, representadas en la contradicción entre el embajador de Washington Adolph Berle y el presidente Getúlio Vargas, en vísperas de su abandono del gobierno en Brasil, y la que enfrentó a Spruille Braden y Juan D. Perón en los umbrales del ascenso de éste al gobierno en la Argentina. La actividad de ambos embajadores en aquella época se encuadra igualmente en los objetivos de una política *latinoamericana* global de los Estados Unidos. En la inmediata posguerra, esa estrategia buscaba centralmente eliminar todo resto de influencia nazi en la región. Mientras Braden se constituía en entusiasta promotor de la Unión Democrática y alentaba maniobras golpistas para impedir el triunfo de Perón, Berle promovía en Brasil iniciativas similares para forzar el alejamiento de Getúlio Vargas de la presidencia; caso éste más sorprendente, si se tiene en cuenta que Vargas —a diferencia de los gobiernos argentinos— había involucrado a su país en la guerra junto a los Aliados, y que las presiones norteamericanas sobre la situación brasileña alinearon en defensa de Vargas a sectores de la izquierda que antes habían atacado sus simpatías pro-germanas.

Más recientemente —y más allá de la heterogeneidad de sus protagonistas internos y de sus respectivos respaldos internacionales— volverán a detectarse similares elementos comunes en los procesos políticos que desembocaron en las trágicas experiencias de las dictaduras militares encabezadas en Chile por el general Pinochet en 1973, y en la Argentina por el general Videla en 1976.

El golpe de estado de 1964 en Brasil

João Goulart asumió la presidencia en agosto de 1961, en el marco de una grave crisis institucional, signada por la imprevista renuncia del presidente Jânio Quadros y la abierta lucha entre la mayoría de los representantes parlamentarios, por un lado, y los ministerios militares, del otro, a favor y en contra, respectivamente, de la sucesión constitucional por el vicepresidente Goulart, proveniente del laborista PTB. Esta oposición se resolvería transitoriamente en un precario acuerdo, cristalizado en la incorporación de una enmienda constitucional que sustituía el régimen presidencialista por una forma de gobierno parlamentaria.

Goulart accedía a la presidencia con apoyo de una parte de la dirigencia sindical y de una corriente nacionalista militar (consolidada durante el

período varguista) con centro en el poderoso Tercer Ejército —con base en el estado de Río Grande do Sul, gobernado entonces por el cuñado de Goulart, Lionel Brizola— y cuya cabeza era su ex compañero de fórmula en 1960, el mariscal Teixeira Lott. Su figura era fuertemente cuestionada por sectores políticamente conservadores del espectro social y militar, que denunciaban sus vinculaciones "comunistas". Representantes de la alta oficialidad militar complotaron abiertamente contra él y se movilizaron en procura de respaldo civil desde el momento mismo de su asunción. La CIA estaba bien informada de ello.²

Desde el gobierno, y sobre el trasfondo de una situación social recalentada por los crecientes reclamos obreros y de los agricultores organizados en las Ligas Campesinas del Nordeste, Goulart avanzó en su control del Ejército mediante el manejo del sistema de promociones, y logró reinstaurar el régimen presidencialista mediante un plebiscito en el que derrotó al parlamentarismo anteriormente instituido en contra suya por el Congreso. Así gestó la base política desde la que puso en práctica un programa reformista y nacionalista, una de cuyas figuras prominentes fue el economista "cepaliano" Celso Furtado, ubicado al frente de un ente estatal de Planificación que inscribía entre sus objetivos la reforma agraria.

Empujado por la radicalización social —en ascenso entonces en todo el ámbito latinoamericano— y buscando asentar el desarrollo económico-social brasileño en una activa movilización de los recursos de capital y humanos del país, impulsó la reforma electoral que daría el voto a los analfabetos —amenazando con ello el poderío parlamentario de la bancada "ruralista"— y aprobó la expropiación de varias empresas norteamericanas, entre las que se destacaron la Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense en Porto Alegre, filial del *holding* AMFORP, y la Companhia Telefônica Nacional, subsidiaria del monopolio de las telecomunicaciones ITT.³

Su programa político-económico no implicaba novedad: se inscribía en la corriente mundial de los movimientos nacionalistas-reformistas que buscaban llevar a la práctica las aspiraciones nacionales de desarrollo e independencia, y que desde fines de los 50 encarnaban países como Egipto, Irán e Irak. Corriente que, a nivel mundial, comenzaba a concitar el interés político de la estrategia soviética, en la medida en que esas aspiraciones reformistas e independentistas afectaban los intereses de las potencias "occidentales" rivales.

El nuevo presidente del Brasil no era un revolucionario. "*Goulart, con su background de latifundista, estaba lejos de ser el prototipo de un izquierdista radical* —define en sus memorias quien fuera embajador de Goulart en Estados Unidos, Roberto Campos— [*p*]ero estaba siendo empujado hacia la

radicalización en la peligrosa esperanza de cabalgar al tigre sin ser comido por él.⁴

En consonancia con su política interior, y en el contexto internacional de la Guerra Fría, Goulart continuó basando las relaciones del Brasil en los principios de la Política Exterior Independiente (PEI) formulados durante la breve presidencia de su predecesor, Jânio Quadros. La PEI, consecuentemente representada por el canciller Santiago Dantas, aspiraba a mejorar la inserción brasileña en el escenario político y económico internacional mediante la promoción de la paz mundial, la coexistencia pacífica entre las superpotencias y el desarme, así como la defensa de los principios de autodeterminación y no intervención. Procuraba intensificar las relaciones comerciales con todas las naciones, incluidas las del bloque soviético, y ampliar el mercado externo para los productos primarios brasileños. En creciente contradicción con la orientación que impregnaba la política estadounidense de la Alianza para el Progreso, deseaba también ensanchar el margen de autonomía tanto en la formulación de planes de desarrollo como en la aplicación de toda ayuda externa.

Con estos objetivos, la diplomacia brasileña postulaba la transformación de las estructuras económicas internacionales, y sustentaba la idea de un frente unido de las naciones periféricas por el desarrollo.⁵

Estas orientaciones suscitaron una fuerte resistencia interna. A comienzos de 1962, sectores representativos de los grandes hacendados y de la concentrada industria extranjera y nacional brasileña —sectores que estaban en la base de las variadas organizaciones anticomunistas de la derecha social y política brasileña fundadas en apenas dos años—, así como grupos minoritarios de la oficialidad y las más altas jerarquías de la Iglesia, eran ya partidarios de dar un corte contundente —golpista— al nudo gordiano que planteaba el ascenso de la movilización obrera y campesina y del nacionalismo reformista y de sesgo antiimperialista de la línea Quadros-Goulart, en todo lo cual veían una amenaza directa a sus intereses sectoriales. Visto el considerable apoyo popular de que gozaba Goulart, esos sectores de la dirigencia social y política buscaron "convencer" al embajador norteamericano Lincoln Gordon de que los Estados Unidos respaldaran tal tipo de "salida".

Pese a las múltiples prevenciones que el Departamento de Estado albergaba respecto de los antecedentes y el programa político de Goulart, Washington adoptó de inicio una política de "cooperación cautelosa".⁶ Gordon pensaba entonces que la línea de acción conveniente no era todavía el desplazamiento del gobierno; por el contrario, la única alternativa —creía— era fortalecerlo. En consonancia con los funcionarios de inteligencia de Washington, calculaba que, aunque Goulart siguiera enfatizando el carácter independiente

de su política exterior, la necesidad del auxilio financiero estadounidense y otras consideraciones de política interna lo tornarían "*menos truculento hacia los Estados Unidos que lo que había sido la administración Quadros*".⁷ Así, la diplomacia norteamericana no atribuyó públicamente al presidente, sino a su canciller, Santiago Dantas, la responsabilidad por la decisión de reanudar las relaciones diplomáticas con la URSS (noviembre de 1961), y por la oposición brasileña a las sanciones impulsadas por Washington contra Cuba en la Conferencia de la OEA de Punta del Este (enero de 1962). La posición brasileña en esta Conferencia puso al gobierno de Kennedy frente a una disyuntiva: el embajador norteamericano ante la OEA, Lesseps Morrison, era partidario de forzar a Brasilia a aprobar las sanciones; en cambio, el grupo de asesores que incluía a Rostow, Goodwin y Schlesinger temía que el intento de imponer al Brasil tal "acuerdo" pudiera llevar a la fractura de la OEA y al reforzamiento de las posiciones anti-norteamericanas más radicalizadas en Brasil mismo. Esta posición se impondría transitoriamente. A fin de cuentas, Brasil era más importante que Cuba.⁸

Pero Washington no podía admitir otra Cuba, y menos una de dimensiones continentales como Brasil, el país más poblado y económicamente más importante de Sudamérica.

El año 1962 marca un punto de inflexión en la política norteamericana hacia el gobierno de Goulart. Bajo la presión de los sectores conservadores internos, de los intereses norteamericanos afectados por las expropiaciones y de los "duros" del Departamento de Estado preocupados por el rumbo de la política exterior brasileña, los Estados Unidos —a través de la CIA y de la propia Embajada— modificarían su posición vacilante, pasando a colaborar activamente con grupos anti-Goulart como el IPES (Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales) y el IBAD (Instituto Brasileño para la Acción Democrática),⁹ financiando su equipamiento y propaganda. Este respaldo estuvo incluso en el trasfondo de la creación de organizaciones campesinas auspiciadas por la Iglesia brasileña con el declarado fin de contraponerlas a las Ligas Campesinas encabezadas por Francisco Julião en el Nordeste y a la potencial influencia de la fracción recientemente escindida del prosoviético PC Brasileño y que constituiría el PC do Brasil, una organización que buscaba arraigar en el campesinado pobre del país.

En marzo de 1962 las autoridades norteamericanas aprobaron un acuerdo de asistencia financiera negociado por el FMI con Santiago Dantas, pero advirtieron que todo nuevo aporte quedaba sujeto a la aplicación de un duro programa de estabilización. El gobierno norteamericano pasó a utilizar recurrentemente el "arma" financiera para condicionar y forzar la modificación de las políticas de Goulart. En el curso del mismo año, el FMI bloqueó los fondos compensatorios acordados a Dantas, reduciendo de 100 a 60

millones de dólares el préstamo concedido. Luego, al tiempo que se suspendía toda asistencia al gobierno federal, el gobierno norteamericano pasó a negociar la concesión de fondos directamente con los gobernadores estaduais de la oposición (particularmente el que encabezaba en Guanabara el conservador Carlos Lacerda) y condicionó el refinanciamiento de la voluminosa deuda externa brasileña a la previa satisfacción de los acreedores europeos, cuya parte era en conjunto mayor que la de EE.UU. El inicio de esas negociaciones tendría lugar en París en marzo de 1964, poco antes del derrocamiento de Goulart.

Las presiones estadounidenses no fueron ajenas a la renuncia de Dantas como ministro de Exteriores, ni al rechazo parlamentario a su designación como primer ministro a mediados de 1962, poco después de la visita en abril de Goulart y su canciller a Estados Unidos para la concreción de un paquete de asistencia de la APEP con destino al empobrecido Nordeste brasileño. Prácticamente en forma simultánea con la firma de este acuerdo, el Departamento de Estado lanzó una campaña agitativa de la opinión pública centrada en el fracaso de Goulart frente a la grave crisis económica que estremecía al Brasil con inflación, salarios estatales impagos, escasez de alimentos, desempleo, migración de la población rural a las ciudades, invasiones campesinas de haciendas, huelgas y dificultades financieras.

Un nuevo hito del intervencionismo norteamericano en la política interna del Brasil fueron las elecciones parlamentarias y estaduais de octubre de 1962, decisivas porque en ellas se renovaría la totalidad de los Diputados, dos tercios de las bancas del Senado y la mitad de las gobernaciones. El "modelo" de injerencia desarrollado allí sería nuevamente utilizado en las elecciones presidenciales de Chile en 1964. El núcleo de tal "modelo" no era otro que la hoy comúnmente llamada "desestabilización" política. El embajador Lincoln Gordon admitiría más tarde que los Estados Unidos "invertieron" unos 5 millones de dólares en la misión de torcer la voluntad electoral de parte significativa de la ciudadanía brasileña —otras fuentes calculan entre 12 y 20 millones de dólares—, en su mayor parte proporcionados por la CIA y canalizados a través del First National Bank of New York y del Royal Bank of Canada. Paralelamente, el propio presidente Kennedy tomó la decisión de usar fondos de la agencia oficial de asistencia USAID para la construcción de obras públicas que ayudaran a crear una imagen favorable a los candidatos a gobiernos estaduais enfrentados a Goulart.¹⁰

Tal como el embajador Gordon preveía a fines de 1961, las urgencias financieras y los condicionamientos políticos signaron el cambio de orientación que produciría la designación de Araújo Castro al frente de las Relaciones Exteriores del Brasil en agosto de 1963. Las pautas del nuevo ministerio alterarían sensiblemente la Política Exterior Independiente,

considerando (en aras de la "emulación pacífica" proclamada por la dirigencia del Kremlin) ya obsoleta la bipolarización del sistema de poder mundial, abandonando en consecuencia la línea de "negociación neutralista" y acentuando el perfil desarrollista de los nuevos parámetros de la política exterior. En el plano interno, esto se correspondió con los lineamientos esencialmente "ortodoxos" de la estabilización económica promovida por el Plan Trienal (1963-65) elaborado por el ministro de Desarrollo Económico, Celso Furtado.¹¹

Paralelamente, la diplomacia norteamericana alentaba maniobras objetivamente golpistas desde dentro mismo del gobierno: saltando la autoridad presidencial, Araújo Castro dispuso —a iniciativa del general Castello Branco y mediante un simple cambio de notas con el encargado de negocios de la embajada estadounidense— la revalidación del Acuerdo Militar bilateral de 1952. El pacto de 1952 atribuía al Ejército norteamericano derechos exclusivos para colaborar en la organización y operación de la Escuela Superior de Guerra, según el modelo del *National War College* de Washington.¹² En la práctica, su revalidación proporcionaba una base legal para una potencial intervención armada en el Brasil con el pretexto de reprimir la "agresión comunista".

No obstante, las relaciones económicas internacionales del Brasil siguieron teniendo uno de los pilares de su "poder de negociación" en el intercambio con los países del Este: en abril de 1963 se había firmado un acuerdo comercial con la URSS que preveía la triplicación del comercio bilateral, de US\$ 70 millones en 1962, hasta US\$ 220 millones en 1965.¹³

En la medida en que las políticas de Goulart afectaban a los intereses norteamericanos, la diplomacia y los organismos estadounidenses de asistencia intensificaron su campaña de desprestigio, caracterizando al gobierno brasileño como "inepto", especialmente por no suscribir las medidas de "autoayuda" prescriptas por la APEP y los programas de estabilización sugeridos por el Banco Mundial y el FMI. Se lo acusaba de oportunista e interesado en sacar ventajas políticas del descontento económico y social resultante de la recesión económica y del soterrado sentimiento nacionalista existente.¹⁴

Cuando, hacia mediados de 1963, Goulart ensayó —mediante la reactivación de una ley de remesas de ganancias que afectaba al capital extranjero— medios de resistencia ante la ofensiva golpista apañada por Washington, la Casa Blanca hizo llegar a la Embajada norteamericana en Brasilia orientaciones con un claro sentido de advertencia (válido también para la Argentina, transcurrido un mes escaso de la cuestionada victoria de la UCR del Pueblo en las urnas y faltando dos meses para la asunción de Illia). La diplomacia estadounidense debía enfatizar, "tanto mediante la palabra como

mediante la acción", que los Estados Unidos "favorecen la reforma social y económica y el desarrollo tan fuertemente como la estabilidad financiera y la protección de la inversión extranjera".¹⁵ Los objetivos del Departamento de Estado se hicieron cada vez más explícitos: "Promover y fortalecer en todos los sectores de la vida brasileña fuerzas democráticamente orientadas que puedan contener los excesos no democráticos o anti-democráticos de Goulart o de sus partidarios izquierdistas o ultranacionalistas... y facilitar la sucesión más favorable posible en el caso de que una crisis del régimen lleve a la remoción de Goulart, y en todo caso en las elecciones de 1965".¹⁶

El populismo de Goulart recibía, entonces, presiones de dos flancos. De un lado, los Estados Unidos cuestionaban cada vez más sus actitudes (e incluso su legitimidad) y presionaban para que Brasil abandonara las iniciativas de reforma agraria y las expropiaciones, principalmente de AMFORP e ITT. Del otro, la creciente movilización de las masas obreras y campesinas motorizaba la crítica, desde la izquierda interna, a la tendencia oficial a la conciliación por parte de sectores nacionalistas y reformistas como el gobernador de Río, Lionel Brizola.¹⁷

Hacia fines de 1963, el Departamento de Estado sistematizó su injerencia en la situación interna brasileña para provocar el derrocamiento de Goulart. Según el embajador Gordon, la preocupación norteamericana era que el "autoritarismo izquierdista" de Goulart pudiera provocar "un golpe más radical y probablemente dirigido por los comunistas contra Goulart".¹⁸ También para el diplomático Roberto Campos, el deterioro de la situación en Brasil abría la posibilidad no de una sino de *dos* reacciones militares: una contra Goulart y otra a favor suyo, abriendo un rumbo de guerra civil de imprevisibles derivaciones y con un potencial "efecto dominó" en otros países de América Latina.¹⁹

Realista o no, esta perspectiva precipitó una sucesión de acciones de la diplomacia y la inteligencia norteamericanas dirigidas a acelerar y orientar el desemboque golpista. Puntos decisivos en este rumbo fueron la designación como agregado militar de la embajada en Brasilia del general Vernon Walters, viejo amigo personal del mariscal Humberto Castello Branco, y el envío del emisario de la CIA Dan Mitrone, quien tuvo a su cargo la organización del contrabando de armas destinadas a la formación de grupos paramilitares golpistas.²⁰ El entonces coronel Walters tenía antiguos vínculos con los oficiales brasileños que habían formado parte del destacamento que luchó junto a sus colegas norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque posteriormente descartó en forma reiterada que los Estados Unidos —y él personalmente— hubieran tenido participación alguna en la gestación del golpe del 31 de marzo de 1964, son numerosos los indicios de que tal interpretación no es en absoluto infundada. El mismo Roberto Campos

admite, aunque indirectamente y responsabilizando del golpe principalmente al propio Goulart, que "*parecía extraño que Walters hubiese, en telegrama del 27 de marzo al Departamento de Estado, adivinado hasta la propia fecha del levantamiento*".²¹ Y el propio Vernon Walters, en una entrevista concedida a comienzos de septiembre de 1999, frente a la acusación de haber apoyado el golpe de Castello Branco, esboza una respuesta elusiva que conlleva una admisión implícita: "*¿Qué consejo podría haberles dado yo a los militares brasileños, que en esa época ya habían derrocado a dos presidentes? —interroga a su vez al periodista— Ellos no necesitaban mi apoyo... Lo que hay que comprender es que en aquella época, en América Latina, los militares eran vistos como 'garantía del orden y de la Constitución'*".²²

Los Estados Unidos utilizaron también sistemáticamente los Programas de Asistencia Militar (MAP) como instrumento de penetración política e ideológica en los estamentos militares. El *Jornal do Brasil* publicó, en diciembre de 1976, un telegrama confidencial del 4 de marzo de 1964 enviado por el embajador Lincoln Gordon al subsecretario de estado Thomas Mann, en el que se decía: "*Nuestro MAP es un factor altamente influyente en la adopción por los militares [brasileños] de una actitud pro-EE.UU. y pro-Occidente... Como consecuencia del entrenamiento y aprovisionamiento de material, el Programa de Asistencia Militar se torna un vehículo esencial en el establecimiento de una estrecha relación con los oficiales de las Fuerzas Armadas*".²³ El mismo documento califica a los militares brasileños como "*un factor esencial en la estrategia de contener los excesos izquierdistas del gobierno de Goulart...*". Y agrega sugestivamente: "*Las Fuerzas Armadas no sólo tienen capacidad para suprimir posibles desórdenes internos, sino también para servir como moderadores en los asuntos políticos brasileños...*".

Finalmente, el gobierno norteamericano acompañó el movimiento militar con el montaje de la llamada "Operación Brother Sam", que incluyó la movilización de una fuerza naval desde la sede del Comando Sur estadounidense en Panamá para un potencial apoyo armado al levantamiento. Una comunicación ultrasecreta enviada por la embajada norteamericana en Río de Janeiro al Estado Mayor Conjunto en los primeros días de abril —pocas horas después de producido el golpe— aludía a un fardo de 110 toneladas de armas y municiones que permanecía pendiente de una determinación del embajador Gordon sobre la necesidad de un eventual apoyo norteamericano por parte de las fuerzas militares brasileñas; según el mismo documento, una fuerza de tareas de transporte continuaba su marcha hacia el Atlántico Sur hasta tanto hubiera certeza definitiva de que no haría falta una "demostración de poderío naval".²⁴ El propio embajador Gordon reconoció —mucho más tarde— la paternidad de la idea de la "Operación".²⁵

Pero no habría resistencia organizada: la "Operación Brother Sam" fue suspendida.

Gordon saludó con entusiasmo la caída de Goulart el 1º de abril, declarando antes de transcurrido un mes que ello daría al Brasil una nueva oportunidad para realizar los ideales de la Alianza para el Progreso. A comienzos de mayo, en un discurso en la Escuela Superior de Guerra de Río de Janeiro, exaltó la "revolución" equiparándola, entre los hitos decisivos de la historia mundial de mediados del siglo XX, con el Plan Marshall y la resolución de la crisis de los misiles en Cuba.²⁶ Existe, además, transcripción de un diálogo entre el presidente Johnson y el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Thomas Mann, el viernes 3 de abril de 1964, tres días después del golpe. "Mann: *Espero que Ud. esté tan feliz respecto al Brasil como lo estoy yo.* LBJ: *Lo estoy.* Mann: *Pienso que es lo más importante que ocurrió en el hemisferio en tres años*".²⁷

Lincoln Gordon continuaría en sus funciones de embajador hasta principios de 1966, cuando fue promovido a Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos.

Consumado el golpe de estado, Washington reconoció al nuevo gobierno provisional en menos de 24 horas. Lo que siguió en cuanto a las relaciones bilaterales es motivo de otro estudio. Pero lo que es preciso señalar —en la medida en que constituyó un antecedente para la actitud que asumiría la diplomacia norteamericana frente a los preparativos golpistas en la Argentina dos años más tarde— es la hoy notoria heterogeneidad de la coalición convergente en el movimiento militar de 1964.

Los dirigentes de Washington se sintieron exultantes con el reemplazo de Goulart por un comando militar que encabezaba su "hombre de confianza", el mariscal Humberto Castello Branco. A apenas tres meses de investido, la CIA estimaba que la "revolución" que había derrocado a Goulart constituía "un serio retroceso para los intereses soviéticos" y que el nuevo presidente había logrado conjurar "las grandes amenazas a la estabilidad política", elogiando su "firme, responsable y ejecutivo liderazgo".²⁸

Pero ni siquiera Castello Branco sería un incondicional de las políticas liberales recomendadas por los organismos financieros internacionales, ni de los lineamientos que el Departamento de Estado promovía en la política exterior de los estados latinoamericanos. Las políticas de la dictadura militar —en particular las iniciativas de planificación económica, un frustrado proyecto de reforma agraria impulsado por el ministro Roberto Campos, y el rechazo al "alineamiento automático" detrás de Washington en los organismos multilaterales—depararían al menos incertidumbre en los círculos decisorios de la política exterior de Estados Unidos. Es posible que, pese a la conocida penetración de sus servicios de inteligencia, éstos no

estuvieran suficientemente prevenidos respecto de la diversidad de tendencias que el frente golpista llevaba encubiertas, y que se impondrían con particular dureza represiva en una "segunda vuelta" con la ascensión del mariscal Arthur da Costa e Silva en 1966.

El Brasil, alineado con los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial, había participado en ella con un contingente militar. Castello Branco había sido su jefe de operaciones. Respecto de Costa e Silva, un documento de la LBJ Library afirma que, aunque amigo de Estados Unidos, al no haber servido en aquella Fuerza Expedicionaria carecía del "*profundo sentimiento de camaradería que los militares norteamericanos habían desarrollado entre muchos de sus colegas oficiales [brasileños]*".²⁹

Para algunos autores, el golpe militar de 1964 no implicó en la política exterior del país un viraje de 180 grados. Amado Cervo interpreta la "corrección diplomática" de 1964 apenas como "un paso fuera de cadencia". Para este autor, el gobierno militar retornaría en corto tiempo a las tendencias nacionalistas de la política exterior brasileña, e incluso muchos de los postulados de la PEI serían retomados por la diplomacia militar en los 70 con el llamado "pragmatismo responsable". Por su parte, Vargas García critica la interpretación que deriva unilateralmente el pensamiento "geopolítico" de los militares brasileños (especialmente el de Golbery do Couto e Silva) de la influencia doctrinaria norteamericana, enfatizando que el triunfo del heterogéneo frente golpista significó el ascenso al poder de segmentos militares nacionalistas, emergentes en esencia de una dinámica política interna propia, que se negó —incluso durante el período inicial de Castello Branco— a practicar el "alineamiento automático" tras las prioridades de los Estados Unidos, y que culminaría en la etapa Geisel con el rompimiento del Acuerdo Militar de 1952.³⁰

Claro que ya entonces, promediando el segundo quinquenio de la década, el escenario internacional comprendería profundas transformaciones con el relativo debilitamiento de los EE.UU. —golpeado militar y políticamente por su derrota que se perfilaba inevitable en Vietnam y por el ascenso del movimiento de los países del Tercer Mundo, así como por el signo negativo de su balanza de pagos— y con el surgimiento de nuevos polos económicos competidores (CEE y Japón) y la creciente rivalidad con la superpotencia soviética en todo el mundo.

Durante el largo período de casi dos décadas que llenaron Costa e Silva, Garrastazu Medici y Ernesto Geisel, las tendencias nacionalistas en las Fuerzas Armadas, los siempre presentes vínculos de sectores empresariales y castrenses con intereses económicos ligados a las grandes potencias europeas, y el reverdecimiento de la movilización estudiantil, campesina y obrera

generarían contradicciones aún mayores que las que los Estados Unidos habían querido eliminar con el derrocamiento de Goulart.

El golpe de estado de 1966 en la Argentina

La política norteamericana hacia el gobierno de Arturo Illia fue mucho más prudente que la que siguió hacia el presidente brasileño Goulart. La embajada norteamericana en Buenos Aires se mantuvo en una posición "legalista" aún en el marco del endurecimiento de la política exterior estadounidense tras la asunción del presidente Johnson, y prácticamente hasta que se hizo manifiesto que el golpe de estado era irreversible.³¹ Esto tiene su importancia, ya que el Departamento de Estado estaba perfectamente informado de la existencia de sectores militares opuestos a los lineamientos programáticos de Illia y en procura de una oportunidad para provocar una intervención militar desde muy temprano, *incluso desde antes* de la asunción de la presidencia por éste en octubre de 1963.³² La actitud contemporizadora del gobierno norteamericano, de todos modos, no implicaba el abandono de la política de presiones y advertencias más o menos veladas para incidir en la situación interna de la Argentina. A mediados del año siguiente, el Secretario de Estado comunicaba al embajador en Buenos Aires: "*Somos ciertamente conscientes de las presiones políticas sobre Illia y del riesgo de golpe, independientemente de lo que se haga respecto del problema petrolero. Nuestra preocupación se acrecienta —agregaba Dean Rusk, con una apenas disimulada carga de amenaza— por el evidente fracaso del gobierno argentino en comprender que hay cierta conexión entre un acuerdo sobre el problema petrolero y su manifiesta necesidad de inversiones privadas y de asistencia financiera y económica extranjera*".³³

Aunque el propio Goulart no era ni mucho menos un revolucionario, Illia estaba muy lejos de sustentar un programa de reformas sociales y de política exterior que lo aproximara al caso brasileño. Sólo el acelerado ascenso de la temperatura mundial en el marco de la Guerra Fría pudo encender en tal medida las prevenciones del Departamento de Estado respecto del carácter del gobierno radical.

La carrera de Illia hacia los comicios de julio de 1963 se desarrolló en un clima político interno signado por la proscripción del peronismo y de su líder, por lo que la UCR del Pueblo obtuvo la primera minoría y la nominación de su candidato en el Colegio Electoral con apenas el 25% de los votos. Este hecho cuestionaba la legitimidad de la victoria electoral: esta "marca de origen" constituiría un caballito de batalla permanente de la oposición política y, especialmente, de los sectores internos y externos que ya desde 1964 comenzaron a tejer la trama del golpe de estado. El nuevo presidente

accedería a la Casa Rosada hostilizado por la sistemática oposición de la dirigencia sindical y de la mayoría parlamentaria peronista, y condicionado por la coexistencia de contradictorias tendencias conservadoras y populistas dentro del propio radicalismo. Su respaldo se limitaba al sector militar "Colorado", que había resultado derrotado en los enfrentamientos de 1962.

Al mismo tiempo, las formulaciones programáticas de los radicales del pueblo se encuadraban en los lineamientos básicos heredados de la intransigencia radical y alentados por un trasfondo internacional marcado por las propuestas económicas nacionalistas en boga en muchos países del Tercer Mundo, orientaciones que se manifestaron a través de cierta resistencia a las imposiciones del FMI, la concepción de un Estado inclinado al control y la planificación de la economía, así como a la atención prioritaria al mercado interno; y, principalmente, en la decisión de denunciar y anular los contratos petroleros firmados por el presidente Frondizi.

El gobierno de los EE.UU. conocía con mucha anticipación —puesto que había sido proclamada públicamente durante la campaña electoral— la posición del radicalismo favorable a la anulación de los contratos. Tal vez creía que la debilidad política con que llegaba el gobierno radical haría fácil persuadirlo que no la llevara a la práctica.

Los contratos petroleros de exploración y explotación con las empresas extranjeras, nueve de las cuales eran norteamericanas,³⁴ fueron rescindidos argumentando "vicios de forma"; eran cuestionados por no haber sido debatidos por el Congreso ni acordados por licitación. La reacción de la diplomacia norteamericana ante el hecho consumado se hizo eco del disgusto de las empresas estadounidenses afectadas por la medida; sin embargo, no fue tan violenta como podía esperarse, sino más bien contempORIZADORA y dispuesta a promover tratativas directas entre las compañías y el gobierno argentino a fin de alcanzar una renegociación de los convenios o, en su defecto, la justa compensación por la rescisión de los mismos.

Durante el curso de las tratativas, y aun cuando la posición de la representación argentina encabezada por el ministro de Economía, Eugenio Blanco, y el presidente de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Facundo Suárez, se pronunciaba en favor no de la renegociación, sino de un nuevo llamado a licitación abierto y en condiciones competitivas, las compañías estadounidenses continuaron produciendo a requerimiento del gobierno argentino sobre la base contractual anterior: el presidente Illia no era en absoluto enemigo del capital extranjero y se ocupó personalmente de destacar ante el embajador norteamericano que los del petróleo y la electricidad eran casos especiales.³⁵ El gobierno buscaba una solución capaz de conciliar, por un lado, la continuidad de la explotación petrolera y, por el otro, sus promesas preelectorales. Tras una larga conversación privada con el

presidente, el embajador McClintock recomendó al Departamento de Estado adoptar una política de "perfil bajo": tomar a Illia la palabra y dejarlo que enfrentara el embate nacionalista; el funcionario opinaba que las empresas no tenían motivo para temer una expropiación en favor de YPF, como habían amenazado personeros del gobierno argentino a comienzos de mayo.³⁶

Sin embargo, la administración Kennedy no aceptó sin más las disposiciones del gobierno argentino y utilizó la política asistencialista en el marco de la Alianza para el Progreso como un ariete dirigido a doblegar sus limitadas aspiraciones autonomistas:

Un importante objetivo de Estados Unidos se logró con el retorno de Argentina al régimen democrático. El cumplimiento de nuestro objetivo actual requerirá paciencia y perseverancia mientras la nueva administración sigue probando parte de sus dudosas teorías económicas, y aprende a aceptar la necesidad de la cooperación económica internacional. En este período de transición, el programa de Estados Unidos será selectivo, apoyando sectores o metas específicas, pero sin dar respaldo general al gobierno central. [...] si el gobierno argentino fracasa en dar los pasos adecuados para adoptar e implementar las políticas mencionadas, la asistencia de la AID se limitará a actividades muy selectas... La AID enfatizará los préstamos para actividades con un alto componente de intercambio exterior, y evitará financiar proyectos que tendrían el efecto de proveer apoyo al gobierno central.³⁷

La diplomacia estadounidense acusó reiteradamente al gobierno argentino por actitudes y posturas que caratulaba de "nacionalismo extremo", "chovinismo", e incluso "izquierdismo". Al igual que con Goulart en Brasil, utilizó el arma de la asistencia financiera en procura de torcer el rumbo de las políticas gubernamentales, aunque "*con este gobierno chovinista —concluía antes de cumplido medio año de gobierno radical— parece dudoso que la amenaza de negar asistencia estadounidense pueda tener algún efecto*".³⁸ Si la política del Departamento de Estado no fue aún más a fondo en esta dirección, fue por temor a la situación de virtual "ingobernabilidad" que la misma podía desencadenar en un marco de creciente agitación social: "*Nuestro temor no es que el recorte de la ayuda sea inefectivo desde el punto de vista económico, sino que pueda contribuir a la inestabilidad política*".³⁹

Los documentos diplomáticos norteamericanos muestran la acentuada inquietud del Departamento de Estado por la persistencia de la crisis económica —creciente endeudamiento externo pese a las buenas cosechas y al

elevado nivel de reservas, inflación⁴⁰— y por la inestabilidad social y política atizada por una serie de huelgas salariales espontáneas, el Plan de Lucha de la CGT, encabezada por Augusto Vandor a mediados del 64, y el preconizado "Operativo Retorno" del general Perón de fines de ese año, incluyendo también el hallazgo de campamentos guerrilleros en el interior del país,⁴¹ que los diseñadores de la política exterior de Washington veían como indicios de creciente agitación subversiva y de penetración soviética en el país.⁴²

A esa altura consideraban aún favorables las perspectivas del gobierno argentino ("*La posibilidad de una insurrección peronista o comunista es remota*") y, aun sintiéndose incómodos por las recurrentes actitudes nacionalistas del gobierno, insinuaban un dejo autocrítico con respecto a la política norteamericana de presiones. Caracterizaban al gobierno como inclinado a una creciente participación estatal en la economía y poco afecto a la inversión privada extranjera, partidario de la "colaboración económica" más que de la "ayuda" y firmemente opuesto a la "intrusión" de Estados Unidos en los mercados comerciales argentinos, pero atribuían parcialmente esas actitudes "*a las condiciones anexas a nuestra asistencia, consideradas gravosas e inaceptables*".⁴³

Los diplomáticos norteamericanos diferenciaban claramente las tendencias internas existentes en el partido y en el equipo gobernante, trazando una línea divisoria entre los "extremistas" liderados por el vicepresidente Perette y los "moderados" encabezados por el presidente Illia, y concluían que la perspectiva era de predominio de los moderados, lo que consideraban relativamente favorable a los intereses de los Estados Unidos.⁴⁴ A fines de 1965, cuando los rumores de golpe de estado ya se habían tornado insistentes, un cable de la embajada en Buenos Aires (26/11/65) destacaba a los dirigentes radicales Juan Carlos Pugliese y Arturo Mor Roig como "*elementos dentro de la UCRP con los que podemos trabajar*". Así y todo, la cuestión de los contratos petroleros siguió enervando las relaciones incluso con este último sector. A fines de junio de 1964, el Secretario de Estado comunicaba a la embajada en Buenos Aires que las conversaciones del subsecretario Thomas Mann con el ministro de Defensa Leopoldo Suárez "*no abren terreno al optimismo, aunque se lo describe como uno de los 'moderados'*".⁴⁵ Suárez había ratificado el carácter definitivo de la anulación de los convenios y que no debía hablarse de renegociación sino de licitación abierta.

Las autoridades norteamericanas también seguían de cerca la evolución del estado de ánimo militar. A mediados de 1964 consideraban aún predominantes en él las tendencias "legalistas" y partidarias de que las Fuerzas Armadas permanecieran ajenas "a la política": "*La perspectiva actual es que el gobierno completará su término de 6 años*". Pero al mismo tiempo dejaban claramente abierta la posibilidad de un desemboque no institucional de la

crisis económica y política, al señalar que los mandos castrenses sólo removerían al gobierno "*si lo requiriera el interés nacional*".⁴⁶ Poco después —en agosto— tendría lugar el recordado discurso del Comandante en Jefe del Ejército, general Onganía, en la V Conferencia de Ejércitos Americanos en West Point, en el que, recogiendo la nueva doctrina norteamericana de la "seguridad nacional", condicionaba la apoliticidad de las Fuerzas Armadas y su respaldo al régimen constitucional al derecho de derrocar a un gobierno que ellas consideraran despótico, y promovía la integración del Ejército argentino dentro del sistema militar interamericano bajo la égida del Pentágono, que presionaba para convertir a las Fuerzas Armadas del continente en pilares contra el enemigo interno.⁴⁷ Un año más tarde, avanzaría aún más en sus formulaciones doctrinarias, proponiendo ante el general Costa e Silva, ministro de Guerra del presidente de facto Castello Branco, la coordinación de los Ejércitos argentino y brasileño como núcleo de una fuerza interamericana para la lucha antisubversiva.⁴⁸

Durante la presidencia de Illia se sumarían nuevos temas de preocupación para la conducción de la política exterior norteamericana, algunos en el plano económico, alrededor de medidas gubernamentales que afectaban los intereses del capital norteamericano en la Argentina —como la Ley de medicamentos que en 1965 limitó las ganancias de los laboratorios farmacéuticos extranjeros—, y otros en el terreno de la política exterior, en el que el gobierno radical esbozó tibios intentos por salvaguardar la independencia de decisión nacional —como su reticencia a suscribir las sanciones a Cuba y a apoyar la guerra norteamericana contra Vietnam, o a sumar tropas argentinas a la Fuerza Interamericana con la que Estados Unidos aspiraba a legitimar su intervención en la República Dominicana.

Las vacilaciones y ambigüedades del gobierno argentino en este último caso— en el marco del viraje de la política exterior norteamericana con el presidente Johnson— sentaron el precedente inmediato del cambio de actitud estadounidense hacia la situación argentina. Aunque sin comprometer la participación del país, a través del canciller, Miguel A. Zavala Ortiz, la Argentina suscribió la creación de la "Fuerza Interamericana" de la OEA con que los Estados Unidos pretendían dar una cobertura multilateral a su desembarco militar ya materializado a fines de abril, e incluso recogió los argumentos estadounidenses que respaldaban la intervención aduciendo el "*derecho de legítima defensa, individual o colectiva*" frente a la "*revolución exportada o a la agresión subversiva*".⁴⁹ Pero, al mismo tiempo, los funcionarios argentinos persistieron en la defensa del principio de no intervención y en el alcance limitado a esa única circunstancia de la formación de la Fuerza Interamericana, a la que los norteamericanos pretendían dar un carácter permanente en aras de la seguridad continental.

El gobierno de Illia debió navegar en aguas agitadas, donde a las acentuadas presiones de la diplomacia norteamericana se sumaba la posición decididamente favorable a la participación argentina en la fuerza de intervención de los altos mandos de las Fuerzas Armadas —particularmente del Comandante en Jefe del Ejército Onganía, del de la Armada, Benigno Varela, y del ministro de Defensa Ávalos—⁵⁰ y la intensa movilización estudiantil y popular en contra del envío, con grandes manifestaciones cuya represión dejó como saldo la muerte del estudiante Daniel Grinbank. Aunque finalmente se decidió no integrar la fuerza expedicionaria (como sí lo hicieron Brasil y otros cinco países latinoamericanos), la argumentación del gobierno condicionó su interpretación del principio no intervencionista considerándolo un "derecho no absoluto" y caracterizando la iniciativa de la OEA no como una intervención sino como una "mediación", y en definitiva debilitó con sus concesiones la firmeza de su propia posición frente al reclamo norteamericano para que la Argentina y el conjunto de los países latinoamericanos secundaran sus prioridades estratégicas.

Una ambivalencia similar mostró el presidente Illia respecto de la intervención norteamericana en Vietnam. Al tiempo que destacaba ante el embajador Martin su "comprensión" hacia la presencia armada de Estados Unidos en el sudeste asiático, ya que *"a veces es necesario el uso de la fuerza para defenderse de las provocaciones de los agresores"*, negó cualquier asistencia a las tropas estadounidenses más allá de un cierto apoyo alimentario e insistió en la necesidad de hallar una solución al conflicto mediante el diálogo y la mediación de organismos internacionales, y en base al respeto de *todos* los estados y pueblos involucrados.⁵¹

Las ambigüedades gubernamentales frente al caso dominicano constituyeron el telón de fondo que desembocó en el alejamiento del general Onganía de la Comandancia en Jefe del Ejército a fines de 1965. La decisión de derrocar a Illia por parte de los más altos niveles del Ejército ya estaba tomada prácticamente varios meses antes, y la inteligencia norteamericana tenía completa información de ello. A fines de mayo, la CIA informó que el general retirado, ex presidente provisional y dirigente político Pedro E. Aramburu estimaba que, *"en vista de la impotencia del actual gobierno de Argentina para tomar decisiones, ha llegado el momento de abandonar el camino de la acción política legal y buscar los cambios necesarios por medio de un golpe cívico-militar en la línea del golpe brasileño que destituyó al gobierno de Goulart"*. Aramburu había discutido previamente la situación general del país y sus posibles salidas con el Comandante en Jefe, Juan Carlos Onganía, y con el Jefe de la Gendarmería, Julio Alsogaray. Según la CIA, Onganía prefería mantenerse todavía en el terreno de la legalidad, pero *"la penosa*

vacilación" del gobierno en la cuestión de Santo Domingo estaba "acortando su paciencia".⁵²

En esos meses, los preparativos para el movimiento castrense adquirieron estado público. En el plano político interno, ya la prioridad de la divisoria peronismo-antiperonismo había sido reemplazada por otra: a favor o en contra del golpe. Recién allí la diplomacia norteamericana comenzó a virar hacia una actitud complaciente hacia los preparativos golpistas, pero incluso entonces de modo elíptico y presentando su consenso al movimiento castrense en gestación como forzado por la obcecación del gobierno en su "exacerbado nacionalismo" y por su impotencia para gobernar la crisis económica. Pero la vinculación con un sector de los militares argentinos era sólida. Considerando inevitable el golpe militar "*si sigue el desplazamiento hacia la izquierda y el gobierno se muestra incapaz de resolver los problemas sociales y económicos*", el embajador Edwin Martin enfatizó en noviembre de 1965 ante sus superiores en el Departamento de Estado que "*dentro de los militares, el general Onganía constituye aún la figura clave y es esencial que sea ayudado a continuar como Comandante en Jefe del Ejército*".⁵³ La renuncia de Onganía en ese mismo mes inició la cuenta regresiva del golpe militar.⁵⁴

Pero con ello no cesaron las vacilaciones de los representantes de Washington. La aproximación de un desemboque de la situación política argentina precipitaba definiciones de la diplomacia, de la inteligencia y de los ámbitos parlamentarios norteamericanos, no siempre coincidentes y no correspondientes linealmente al tradicional clivaje político entre republicanos y demócratas. Al parecer, las interpretaciones divergentes sobre la situación argentina existían incluso dentro del propio Departamento de Estado. A comienzos de abril del 66, un funcionario de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones de dicho Departamento evaluaba para el Secretario de Estado que, pese a la intensa agitación laboral y la obvia preocupación militar por la situación económica, "*la intervención militar no parece inminente en la Argentina*". El informe destacaba la actitud cautelosa de los militares, estimando que "*no intervendrán a menos que las condiciones económicas y sociales se deterioren hasta un punto próximo al 'caos'*", aunque la situación "*al presente parece lejos de ello*".⁵⁵

Coincidentemente, el embajador Edwin Martin elogiaba ante sus superiores la estabilidad que veía en la Argentina, y justificaba en consideraciones de política interna las divergencias con los Estados Unidos en cuestiones de política exterior, como Vietnam y Santo Domingo. En el plano económico, la situación le parecía "alentadora" —sin dejar de llamar la atención sobre la falta de mejoría en las relaciones comerciales argentino-norteamericanas y el avance del intercambio con los países del bloque soviético— y destacaba la

posición predominante de la influencia de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas del país.⁵⁶

Todavía a comienzos de junio, prácticamente en los umbrales del levantamiento golpista, Martin se manifestaba *"muy confundido sobre lo que pueda suceder al gobierno de Illia"*, destacando la *"creciente tranquilidad y mejor atmósfera"* que creía percibir *"para buscar soluciones políticas más bien que militares"*.⁵⁷ En clara divergencia con las estimaciones de la inteligencia norteamericana, Martin prefería ser optimista respecto a las chances de Illia para hacerse cargo de la confrontación con los militares.

Sin embargo, los servicios de inteligencia estadounidenses ya tenían certeza sobre la puesta en marcha del plan golpista. La CIA ya había informado sobre el cambio de posición del general Onganía a favor del movimiento militar, e incluso adelantaba fecha tentativa del mismo entre los días 6 y 25 de junio.⁵⁸

Aunque las cartas estaban echadas, el consejero de la embajada para Asuntos Políticos, Ellwood Rabenold, compartía las dudas de Martin sobre la validez real de las razones que esgrimía la conducción militar para encarar el cuartelazo, y advertía veladamente sobre las consecuencias que la actitud de Washington frente al golpe de estado podría implicar para las relaciones de Estados Unidos con los países de la región: *"La reacción de EE.UU. no debería aislarnos de otros países líderes del hemisferio"*, estimaba en esos mismos días en su propuesta de planes de contingencia. Y se mostraba sumamente penetrante al dejar entrever, ante el Departamento de Estado, las incertidumbres que la heterogeneidad del frente golpista suscitaba a los diplomáticos norteamericanos *in situ*: *"El gobierno surgido del golpe —preveía— seguirá políticas generalmente aceptables para los Estados Unidos, al menos en el corto plazo"*.⁵⁹

Por su parte, y tal vez disintiendo con la posición del subsecretario Lincoln Gordon, quien en su momento, en su carácter de embajador en Brasilia, se había involucrado personalmente en el golpe brasileño de 1964, el embajador Martin subrayaba las diferencias entre ambos procesos:

Muchos militares se han convencido de que removiendo al gobierno de Illia estarían cumpliendo en la Argentina un rol básicamente idéntico al que las Fuerzas Armadas realizaron en Brasil echando a Goulart. Soy consciente de cuán distintas son en realidad ambas situaciones... [Los militares] han seguido atentamente la ayuda norteamericana al Brasil desde la partida de Goulart, y la prensa publicitó, tal vez excesivamente, el entusiasmo de nuestros inversores por el nuevo régimen en Brasil.⁶⁰

Por eso, Martín decía temer que la diferente actitud norteamericana frente al movimiento no fuera creíble para los militares argentinos, o bien fuese tomada como un caso más de favoritismo de los EE.UU. hacia el Brasil. Martín también temía una imprevisible reacción del nacionalismo castrense: "*Se comparte ampliamente una actitud nacionalista con considerable historia, incluso fuera de los círculos golpistas*". Y concluía: "*Debemos movernos con precaución para asegurar un resultado netamente positivo*". En consecuencia, proponía no promover un encuentro con Onganía, sino "*esperar hasta que haya clara evidencia de la cristalización del programa de acción golpista que justifique correr el riesgo de ser acusados de intervencionismo*".⁶¹

Posiblemente, en el trasfondo de estas incertidumbres estaba la experiencia del proceso brasileño, transcurridos dos años desde el golpe liderado por Castello Branco. En la dictadura brasileña, con el ascenso de Costa e Silva en 1966 habían pasado a predominar sectores militares que no se alineaban automáticamente tras las prioridades de la estrategia norteamericana. De modo similar, en la Argentina la "oferta" golpista incluía no una, sino varias tendencias. Según la CIA, a mediados de mayo de 1965 el general Aramburu hablaba de al menos tres movimientos en gestación, encabezados uno por el general (RE) Enrique Rauch; otro por el almirante (RE) Isaac Rojas y el general (RE) Toranzo Montero (sin especificar de cuál de los hermanos, Carlos o Federico, se trataba); y el tercero por el general Carlos Rosas. El Ejército y la Fuerza Aérea se alineaban con Onganía, mientras que la Armada se inclinaba por los grupos de Rosas o de Rojas.⁶²

Además, aunque la mayoría de las cabezas militares que terminarían siendo predominantes en el heterogéneo frente golpista provenía mayoritariamente de los "Azules" de 1962, coexistían allí al menos dos grandes corrientes: un sector nacionalista-católico con perfiles de corporativismo antiliberal, modernizador e industrialista, alineado con las posiciones internacionales de los Estados Unidos (el ex Comandante en Jefe Onganía, al que la CIA caracterizaba como un profesionalista, "*buen amigo de los Estados Unidos*" y "*altamente respetado por el Presidente Illia*"),⁶³ y otro liberal, vinculado al núcleo de los terratenientes más tradicionales y partidario de diversificar el espectro de las relaciones comerciales y políticas del país sin atender a "fronteras ideológicas" (Alejandro Lanusse - Alcides López Aufranc). Cinco años más tarde, esta última corriente, ya hegemónica en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y en la dictadura originada en 1966, protagonizaría la apertura comercial hacia el "Este". La fuerza de la corriente militar favorable a una aproximación al bloque soviético se haría evidente con el intercambio de misiones castrenses entre ambos países durante la dictadura instaurada en 1976.⁶⁴

Los servicios de inteligencia estadounidenses estaban informados al detalle

tanto sobre los planes golpistas como sobre sus tendencias y sus respectivos líderes. En los últimos días de mayo de 1965, la CIA había informado acerca de las declaraciones obtenidas del entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Julio Alsogaray, dando cuenta de la decisión de los altos mandos de encarar el golpe militar, fijando fecha tentativa para el mes de julio, aunque sin excluir la posibilidad de que la acción se adelantara "si la crisis aumentaba". El informe reseñaba favorablemente la "responsabilidad" y "seriedad" de los objetivos del futuro gobierno militar, tal como los transmitía el general Alsogaray. La Agencia norteamericana enumeraba entre los involucrados en el golpe a los generales Juan Carlos Onganía, Pascual A. Pistarini, Julio Alsogaray, Alejandro A. Lanusse y Osiris Villegas.⁶⁵

Pese a que quien estaba a la cabeza del movimiento (Onganía) era el hombre de mayor proximidad a las posiciones norteamericanas,⁶⁶ el propio secretario adjunto Lincoln Gordon no ocultaba sus recelos, más allá de su respaldo básico al golpe en ciernes. Buscando asegurar la completa sintonía de los dirigentes del movimiento castrense con los objetivos de Estados Unidos, Gordon llegó a sugerir —del mismo modo que lo había hecho para el caso brasileño dos años antes— la utilización de los programas de asistencia militar (MAP) para presionar a los líderes golpistas (el propio Onganía, el Comandante en Jefe Pascual Pistarini, el Jefe del Primer Cuerpo de Ejército Julio Alsogaray, y otros) dejándoles entender que la estabilidad política y constitucional era condición necesaria para que EE.UU. siguiera adelante con los planes de cooperación: "*El MAP —señalaba— es objeto de fuertes críticas por alentar los golpes. El golpe en la Argentina podría llevar a aplicar la legislación pendiente que prohíbe la asistencia militar a los gobiernos de facto*". La inestabilidad institucional constituía, según Gordon, un serio obstáculo a la inversión extranjera, esencial para el desarrollo económico. Y, en clara alusión a la ideología "eficientista" del programa económico de los dirigentes golpistas, insistía: "*La estabilidad es, tal vez, más importante al respecto que la eficiencia*".⁶⁷

Las vacilaciones de la diplomacia norteamericana en la Argentina provocaron la ira de los golpistas más acérrimos. Asumiendo el papel de vocero de los sectores embarcados en el cuartelazo, la revista pro-golpista *Confirmado* (semanario de Jacobo Timerman que dirigía el comodoro Juan José Güiraldes) se preocupó por destacar la existencia de fisuras entre los enfoques del embajador norteamericano Edwin Martin —interesado en mostrar un clima casi de normalidad en el país, que convenía consolidar en beneficio de la democracia continental— y la del subsecretario Lincoln Gordon, quien de visita en Buenos Aires había manifestado que, dadas las diferencias entre las distintas realidades latinoamericanas, no se podía opinar

sobre la Argentina con parámetros que podían ser adecuados para medir situaciones en los países del Caribe, como el de "*militares prepotentes retrógrados opuestos a soluciones constitucionales progresistas*".⁶⁸

En junio, ya en los prolegómenos inmediatos del cuartelazo, *Confirmado* insuflaba arrestos nacionalistas a su diatriba contra "*la ya increíble intervención del embajador Edwin Martin en los asuntos internos de la República, [que] amenaza colocar al rojo vivo el espinoso tema de las relaciones argentino-norteamericanas*". El editorialista Mariano Montemayor compen-saba la posición "legalista" de la embajada remarcando que "*las opiniones estadounidenses están mucho más matizadas de lo que proclama la guerra psicológica de los 'anti-entreguistas' y 'nacionalistas' radicales del Pueblo, aferrados ahora al Departamento de Estado para durar...*".⁶⁹

Pero el conocimiento de la compleja trama interna del frente golpista llevó a los responsables de la política exterior norteamericana —a diferencia de su precipitado apoyo al movimiento anti-Goulart— a adoptar una tesitura de mayor prudencia. Apenas consumado el derrocamiento de Illia, el asesor presidencial W. Rostow, en nota dirigida al presidente Johnson, calificaba al golpe militar de "injustificado" y lo consideraba "*un serio retroceso en nuestros esfuerzos para promover el gobierno constitucional y la democracia representativa en el hemisferio*". En consecuencia, opinaba, "*será preciso reexaminar toda nuestra política hacia la Argentina*".⁷⁰

Por su parte, el experimentado subsecretario Lincoln Gordon era partidario de una actitud esencialmente favorable, sin descuidar ciertos recaudos que significaran garantías para los intereses de largo plazo de la superpotencia. Gordon recomendaba encarar "un paquete delicadamente balanceado", que permitiría la continuidad de los programas militares y asistenciales en curso, independientemente de la temporaria ruptura de relaciones diplomáticas. Sugería iniciar una ronda de consultas a los demás países de la OEA sobre la cuestión del reconocimiento, "*sin antagonizar al nuevo gobierno argentino*". Aunque el reconocimiento debía requerir del régimen militar la aceptación de los compromisos internacionales, el respeto a las libertades civiles y el pronto retorno al régimen constitucional, "*no deberíamos tomar una posición demasiado rígida sobre la agenda electoral*".⁷¹

El propio presidente Johnson compartía esta posición, al tiempo que estimaba necesario conservar cierta apariencia de neutralidad: sugería permanecer "con las manos libres" y conceder el reconocimiento sólo después de que lo hubieran hecho los países latinoamericanos más grandes, "*de modo de no quedar ubicados por delante*".⁷²

Pese a sus vacilaciones y contradicciones frente al golpe de estado en la Argentina, el nuevo rumbo de "mano dura" de la política exterior norteamericana frente al comunismo y los nacionalismos en la Guerra Fría

ya se había afirmado. Cuando el influyente senador republicano Jacob Javits, a mediados de julio, impulsó una enmienda a las normas que regían la ayuda extranjera a los países de la OEA, suspendiendo toda asistencia a cualquier gobierno que llegara al poder por medios inconstitucionales, la iniciativa naufragó junto a las ilusiones que la Alianza para el Progreso y sus promesas de asistencia al desarrollo y la democracia latinoamericanos habían podido despertar en algunos sectores de la dirigencia política de la región.

Conclusiones

El Acta de la Revolución Argentina fundamentó el movimiento militar en la falta de autoridad económica y política del gobierno, que sumían al país en la inflación y la anarquía, y en la necesidad de que las Fuerzas Armadas ocuparan el vacío de poder para luego procurar la modernización del aparato productivo mediante la remoción de las rígidas estructuras políticas y económicas anacrónicas, reordenar la sociedad y, en una tercera etapa, reponer en forma condicionada la vigencia de los mecanismos constitucionales.⁷³ En nombre de esos objetivos, la dictadura suprimió las libertades democráticas y los derechos políticos de numerosas organizaciones y personalidades, disolvió el Congreso y las legislaturas provinciales, prohibió y confiscó a los partidos políticos, persiguió a la militancia política y sindical e intervino violentamente la Universidad de Buenos Aires. En el plano de las relaciones internacionales, se abrió el período de mayor proximidad a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos en la historia argentina, aunque los años posteriores harían evidente la sustancial precariedad de esta nueva hegemonía.

Una rápida reconstrucción de los procesos que desembocaron en los golpes de Estado militares de Brasil y Argentina en la década del 60 muestra que, más allá de sus especificidades de lugar y circunstancias y de sus motivaciones y pugnas internas, ambos movimientos se inscriben en el marco de una estrategia única que se desarrolló por entonces en toda América Latina; una visión *global*, coherente con la gravitación y los requerimientos económicos y políticos de una gran potencia con ambiciones estratégicas de alcance regional y mundial.

En Brasil, donde la inteligencia y la diplomacia norteamericana catalogaban al presidente Goulart como un hombre afín al comunismo, el golpe de estado cívico-militar que lo derrocó en abril de 1964 fue interpretado como un serio retroceso para los intereses soviéticos por fuentes de la diplomacia estadounidense, que enseguida saludaron el "responsable liderazgo" del nuevo presidente, Castello Branco.⁷⁴ Documentos de esos días dejan ver claramente que el cuartelazo no sólo gozó de la simpatía oficial de

Washington, sino también de un planificado respaldo material con armamentos e incluso con una fuerza de tareas que ya a fines de marzo navegaba rumbo al Atlántico Sur.

En el caso argentino, los documentos del gobierno norteamericano prueban que las instancias decisorias de la política exterior estadounidense seguían, asimismo, muy de cerca la evolución social y política del país y las definiciones del gobierno del presidente Arturo Illia desde antes de su misma asunción, y especialmente a partir de la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi con las compañías norteamericanas y otras medidas consideradas "nacionalistas", e incluso de sesgo "izquierdista". La embajada y los servicios de inteligencia norteamericanos estuvieron minuciosamente al tanto de los preparativos golpistas, así como de las diversas corrientes en las fuerzas armadas que pugnaban por encabezarlo, y mantenían sólidos vínculos con el sector que estuvo al frente de la conspiración y que sería hegemónico durante los primeros años de la dictadura instaurada el 28 de junio de 1966.

Más allá de ciertas divergencias de apreciación con la CIA acerca de la actitud a adoptar, y aunque los recelos ante las potenciales derivaciones de la puja interna en el heterogéneo frente golpista determinarían una actitud norteamericana mucho más pasiva que en el caso brasileño, es evidente el apoyo final de Washington al golpe militar. Las diferencias entre los enfoques del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, si bien efectivamente emergen de los documentos de los servicios diplomáticos y de seguridad estadounidenses, son más bien de táctica y no atañen a la cuestión de fondo. Menos de veinte días requirió a la Casa Blanca disponer el reconocimiento del gobierno de facto establecido en la Argentina, efectivizado el día 15 de julio.

En diverso grado y medida, y siempre en función de preservar los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos en el "hemisferio", los "objetivos manifiestos" de la diplomacia norteamericana en ambos episodios (defensa de la democracia, promoción de la libertad de empresa y de mercado) no fueron sino la modalidad retórica que asumió la búsqueda de aliados seguros en el escenario regional de la rivalidad bipolar.

NOTAS

1. "U.S. Policies toward Latin American Military Forces", 25/2/65. Documento secreto del Secretario Adjunto de Defensa a requerimiento de la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson Library (LBJL).
2. "Special Intelligence Estimate, number 93-2-61. Secret." 7/12/1961, pp. 3 y 7. (LBJL).
3. Moniz Bandeira (1989).
4. Roberto Campos (1994), p. 547.
5. Paulo G. Fagundes Vizentini (1995), p. 289.
6. Thomas E. Skidmore (1982).

7. "Short-term prospects for Brazil under Goulart", 7/12/1961, pp. 2 y 7. (LBJL).
8. Ruth Leacock (1990), p. 104.
9. Algunos autores caracterizan a este Instituto como un simple frente de la CIA. Ver, entre otros, Dreifuss, René A. (1981).
10. Ruth Leacock (1990), pp. 119-122.
11. Paulo G. Fagundes Vizentini (1995), p. 262.
12. Thomas E. Skidmore (1982), p. 398.
13. Paulo G. Fagundes Vizentini (1995), p. 279.
14. "Agency for International Development (AID). Program and project (1963)", p. 65. NSF, Agency File, Box 3. (LBJL).
15. Telegrama del Departamento de Estado a la Embajada en Brasil, 16/8/63. Foreign Relations of the United States (FRUS), 1961-1963, Vol. XII.
16. "Políticas propuestas para el corto plazo - Brasil". 30/9/63. FRUS, 1961-1963, Vol. XII.
17. Paulo G. Fagundes Vizentini (1995), p. 268.
18. Michael R. Beschloss (1997), p. 306 (nota al pie).
19. Roberto Campos (1994), p. 550.
20. Moniz Bandeira (1989).
21. Roberto Campos (1994), p. 548.
22. *Clarín*, Suplemento "Zona", domingo 5/9/99.
23. Telegrama de la embajada norteamericana al Dto. de Estado, 4/3/64, U.S. National Archives (USNA).
24. Comunicación *top secret* de la embajada norteamericana en Río de Janeiro al Estado Mayor Conjunto, abril 1964 (LBJL, sin indicación de fecha). La historiadora norteamericana Phyllis Parker publicó en 1976 otros documentos que demuestran la movilización militar de los Estados Unidos para intervenir eventualmente en la posible lucha interna. Ver, también, Costa Couto (1999), p. 26.
25. En declaraciones formuladas a *O Estado de São Paulo* el 31/3/94, al cumplirse tres décadas del movimiento militar, transcritas por Roberto Campos (1994), p. 550.
26. Thomas E. Skidmore (1982), p. 397.
27. Michael R. Beschloss (1997), p. 306.
28. Memorandum CIA No. 1610/64, 29/7/64. (LBJL).
29. National Security Council, Country Files, Brazil, Box 11-12. (LBJL).
30. Eugenio Vargas Garcia (1997), pp. 22-24.
31. Joseph Tulchin (1990).
32. Memo del Director del Bureau of Intelligence and Research (Hughes) al Sec. de Estado Rusk, 11/10/63. FRUS 1961-63, Vol. XII, *Argentina*.
33. Telegrama del Dto. de Estado a la embajada en Buenos Aires, 20/6/64. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6. (LBJL).
34. Las compañías norteamericanas eran Cities Service, Astra, Cadipsa, Continental-Marathon, Esso, Ohio, Pan American, Tennessee Gas y Union Oil-Cabeen.
35. McClintock al Dto. de Estado, 16/4/64. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6. (LBJL).
36. Cable de McClintock al Dto. de Estado, 9/5/64. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6. (LBJL).
37. AID. Program and project (1963), p. 59. (USNA).
38. Cable del embajador McClintock al Dto. de Estado, 11/3/64. (LBJL).
39. Del Dto. de Estado a la embajada en Buenos Aires, 23/6/64. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6. (LBJL).
40. Cable del embajador McClintock al Sec. de Estado, 11/3/64. NSF, Argentine Cables, Vol. I. (LBJL).
41. Conferencia de prensa del Jefe de Gendarmería, Julio Alsogaray, sobre la existencia de grupos guerrilleros con armamento provisto por fuentes extranjeras (Cuba, Bolivia, Brasil y

- Venezuela). De McClintock al Sec. de Estado, 26/3/64. NSF, Argentine Cables, Vol. I. (LBJL).
42. Sobre las relaciones entre la Argentina y la Unión Soviética en el período, ver Rapoport, Mario: "La Argentina y la Guerra Fría. Opciones económicas y estratégicas de la apertura hacia el Este, 1955-1973", en *Ciclos*, nº 8, 1er. semestre 1995.
 43. Cablegrama de Adair al Dto. de Estado, 19/5/64. LBJL, NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6.
 44. *Ibidem*.
 45. Telegrama del Dto. de Estado a Buenos Aires, 20/6/64. LBJL, NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6.
 46. Cablegrama de Adair al Dto. de Estado, 19/5/64. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6. (LBJL).
 47. Robert A. Potash (1994), pp. 196-198.
 48. Alain Rouquié (1982), T. 2, p. 232.
 49. Juan A. Lanús (1984), p. 210.
 50. Juan A. Lanús (1984), p. 213.
 51. Cable de Martin al Dto. de Estado, 9/2/66. (LBJL).
 52. Cable de la CIA, 29/5/65. LBJL, NSF Country Files, Argentine Cables, Vol. II, Box 6.
 53. "Perspectivas de las relaciones EE.UU.-Argentina bajo el gobierno del Presidente Illia en los próximos 6 meses". Informe del embajador en Buenos Aires al Sec. de Estado, 26/11/65. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. I, Box 6. (LBJL).
 54. Alain Rouquié (1982), T. 2, p. 235.
 55. Nota de Inteligencia de George Denney al Secretario de Estado, 7/4/66. NSF Country Files. Argentine Memos, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 56. De la embajada en Buenos Aires al Dto. de Estado, 27/4/66. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 57. Martin al Dto. de Estado, 4/6/66. NSF Country Files. Argentine Memos, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 58. Cable de la CIA, 6/6/66. NSF Country Files. Argentine Memos, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 59. De Ellwood Rabenold al Dto. de Estado: "Planes de contingencia para los acontecimientos que puedan surgir de ahora a las elecciones nacionales de marzo de 1967", 4/6/66. (USNA).
 60. Martin al Sec. Adjunto Gordon, 8/6/66. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 61. *Ibidem*.
 62. Cable de la CIA, 29/5/65. NSF, Country Files, Argentine Cables, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 63. Informe de la CIA, mayo de 1965. NSF Country Files, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 64. Ver M. Rapoport: "La posición internacional de la Argentina y las relaciones argentino-soviéticas", en *Argentina en el mundo, 1973-1987*, Bs. As., 1988.
 65. Cable de la CIA, 2/6/66. NSF, Country Files, Argentine Memos, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 66. Datos biográficos de Onganía. Informe de la CIA, junio de 1966. (LBJL).
 67. Telegrama de L. Gordon al embajador Martin, 7/6/66. NSF Country Files. Argentine Cables, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 68. *Confirmado*, 7/6/66.
 69. *Confirmado*, 16/6/66.
 70. W. Rostow al Presidente, 28/6/66. NSF Country Files, Argentine Memos, Vol. II, Box 6. (LBJL).
 71. Memo de W. Rostow al Presidente, 29/6/66. (LBJL).
 72. Memo de la Casa Blanca a Rostow, 29/6/66. (LBJL).
 73. Alain Rouquié (1982), T. 2, p. 251.
 74. Memorandum de la CIA, 29/7/64. (USNA).

BIBLIOGRAFÍA

- Beschloss, Michael R. (Editor): *Taking Charge. The Johnson White House Tapes, 1963-1964*, 1997.
- Campos, Roberto: *A lanterna na popa*. Rio de Janeiro, 1994.
- Cantarinio, Geraldo: *1964. A Revolução para inglês ver*. Rio de Janeiro, 1999.
- Cervo, Amado y Bueno, Clodoaldo: *História da política exterior do Brasil*. São Paulo, 1992.
- Costa Couto, Ronaldo: *História indiscreta da ditadura e da abertura. Brasil: 1964-1985*. Rio de Janeiro, 1999.
- Dreifuss, René A.: *1964. A conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe*. Petrópolis, 1981.
- Fagundes Vizentini, Paulo G.: *Relações internacionais e desenvolvimento. O nacionalismo e a política externa independente, 1951-1964*. Petrópolis, 1995.
- Kaplan, M. y Ianni, O.: *América Latina y Estados Unidos. Relaciones políticas internacionales y dependencia*. Lima, 1973.
- Knippers Black, Jan: *United States Penetration in Brazil*. University of Pennsylvania Press, 1977.
- Lanús, Juan Archibaldo: *De Chapultepec al Beagle. Política exterior argentina, 1945-1980*. Bs. As., 1984.
- Leacock, Ruth: *Requiem for Revolution. The United States and Brazil, 1961-1969*. Kent (Ohio) and London (England), 1990.
- Moniz Bandeira: *Brasil-Estados Unidos: a rivalidade emergente (1950-1988)*. Rio de Janeiro, 1989.
- Moniz Bandeira: *Estado nacional e política internacional na América Latina. O continente nas relações Argentina-Brasil (1930-1992)*. São Paulo, 1995.
- O'Donnell, Guillermo: *El Estado burocrático-autoritario*. Bs. As., 1982.
- Paradiso, José: *Debates y trayectoria de la política exterior argentina*. Bs. As., 1993.
- Potash, Robert: *El Ejército y la política en la Argentina, 1962-1973. De la caída de Frondizi a la restauración peronista. Primera parte, 1962-1966*. Sudamericana, Bs. As., 1994.
- Puig, J. C.; Moneta, C.; Pérez Llana, C. y Carella, A. L.: *De la dependencia a la liberación. Política exterior de América Latina*. Bs. As., 1973.
- Rapoport, Mario: "La Argentina y la Guerra Fría. Opciones económicas y estratégicas de la apertura hacia el Este, 1955-1973", en *Ciclos*, nº 8, 1er. semestre 1995.
- Rapoport, Mario: *Crisis y liberalismo en la Argentina*. Bs. As., 1998.
- Rapoport, Mario: *El laberinto argentino. Política internacional en un mundo conflictivo*. Bs. As., 1997.
- Rouquié, Alain: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*. Emecé, Bs. As., 1982. T. 2.
- Skidmore, Thomas E.: *Brasil. De Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-1964)*. Rio de Janeiro, 1982.
- Tulchin, Joseph: *La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza*. Buenos Aires, 1990.
- Vargas García, Eugênio: "O pensamento dos militares em política internacional (1961-1989)", en *Revista Brasileira de Política Internacional*, Año 40, No. 1, 1997.

FUENTES DOCUMENTALES

- Lyndon Baines Johnson Library, National Security Files (NSF), Presidential Papers, Austin, Texas.
- U.S. National Archives (USNA), Diplomatic Papers, Washington D.C.
- Foreign Relations of the United States (FRUS), 1961-1963. Vol. XII. *American Republics: Brazil, Argentina*. Washington D.C., 1996.
- Revistas *Confirmado* y *Primera Plana* (Buenos Aires) y periódicos de la época.